

PARA UNA CRÍTICA DE LA POLÍTICA EN VENEZUELA

Keta Tamara Stephany Ruiz

RESUMEN

En este artículo abordó la discusión, como problema a investigar, de las posibilidades y los caminos actuales para la democratización en Venezuela de la política y de la producción, dentro de un esquema de renovación social, a partir de una caracterización de la articulación de la globalización con la política venezolana. El propósito de tal caracterización y tal examen sería procurar una perspectiva para la praxis política, desde la reconstrucción teórica de la coyuntura sociopolítica en Venezuela, que incorpore la utopía como fuerza social y moral.

Palabras Claves: democratización, política venezolana, cambio social.

ABSTRACT

This article gets to the present discussion of the possibilities and current ways for the democratization in Venezuela of politics and production, within a scheme of social renovation, from a characterization of the joint of the globalization with venezuelan politics. The intention of such a characterization and such examination would be to try a perspective for the political practice from the theoretical reconstruction of the political and social conjuncture in Venezuela, which incorporates the utopia as social and moral force.

Key words: democratization, venezuelan politics, social change

del Estado a las nuevas exigencias del capital transnacional, siguiendo en forma ortodoxa precisamente el esquema fondomonetarista contra el cual se habían pronunciado, y a pesar de la fuerte oposición y movilización popular. Ésta fue brutalmente reprimida por el gobierno de Pérez, y canalizada por los actores políticos en el gobierno de Caldera, en especial por la CTV (Stephany, 2006). El gobierno del tercero también ha tropezado con gigantescas acciones de calle, un intento de golpe de Estado y un referendo revocatorio. En los tres casos, la acción colectiva de carácter político, se erigió en momentos clave en eje de la vida nacional y muro contra el cual se fueron a estrellar algunas quimeras de los gobernantes de turno.

En 1989, la estrategia gubernamental limitó la construcción de viabilidad del programa de ajustes macroeconómicos (PAME) de inspiración fondomonetarista, a la obtención de recursos financieros y al montaje de una concertación formal con algunos actores (Stephany, 2006). Esta estrategia no sólo no garantizó la viabilidad de la nueva política sino que contribuyó a hacer inviable el mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez.

En efecto, el anuncio e implementación de este paquete de medidas que el gobierno enmarcó en un plan quinquenal bautizado como *El Gran Viraje*, generó un profundo descontento y una rebeldía que se extendió a los distintos estratos sociales y se mostró tanto pacífica como violentamente. El deterioro de las condiciones de vida de la población y el proceso de deslegitimación y pérdida de representatividad política de los partidos del status quo contribuyó, ciertamente, con esta crispación social, pero ella tiene claramente su origen en el anuncio y primera implementación del PAME.

Este programa se propuso cristalizar la adecuación del Estado venezolano a las nuevas demandas del capital monopolista transnacional con base en los estados imperialistas –y lo logró en alguna medida importante- a través de las siguientes disposiciones: liberación del mercado de bienes y eliminación de las políticas de subsidios; sustitución del control de cambio por la unificación y liberación del mercado cambiario; liberación del mercado monetario a través de la eliminación de los controles a las tasas de interés; recorte del programa de gastos de la administración pública y entes descentralizados; eliminación de las exoneraciones arancelarias, aumento considerable del precio de 14 productos petroleros en el mercado interno; impuesto general a las ventas; ajuste de tarifas y reducción de costos de empresas del sector público y privatizaciones; nuevos préstamos provenientes

1
En Venezuela no es sustentable una política que simplemente goce del aval de un triunfo electoral arrollador. Ni siquiera una que logre el concurso de actores sociales y políticos representativos y diversos en términos de su adhesión u oposición al gobierno de turno. Para poderse constituir en plataforma de lanzamiento de una transformación viable, profunda y de largo aliento, en sintonía con las aspiraciones de cambio de la mayoría y capaz de sacar a la nación de las crisis recurrentes y el subdesarrollo, un programa político en Venezuela, debería contar con la aprobación y concurso ciudadano en sus distintos sectores.

Los últimos tres presidentes electos en Venezuela, Carlos Andrés Pérez en 1988, Rafael Caldera en 1993 y Hugo Chávez en 1998, agitaron en sus campañas electorales contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el modelo neoliberal. Los dos primeros iniciaron la adecuación

de los organismos multilaterales por 6.000 millones de dólares para el período 1992-1993 (Carta de Intención FMI-Venezuela).

Al *Sacudón* de febrero de 1989 lo sucedió un ciclo de protestas, entendido éste como una sucesión de protestas que ocurre en una sociedad, caracterizada por la creciente intensidad de los eventos, la ampliación de los sectores sociales que se involucran, la introducción de cambios en las formas e ideología de lucha y la participación tanto organizada como desorganizada (Tarrow, 1983). Entre enero de 1989 y diciembre de 1993, *El Nacional*, uno de los principales diarios de Venezuela, registró más de 500 acciones de protesta, mientras que *Provea*, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, entre septiembre de 1989 y septiembre de 1994 contabilizó 4.237 luchas populares (López, 1999a: 221,222). En ese contexto de agudización de la conflictividad social, en 1992 se produjeron dos intentos de golpe de Estado (4 de febrero y 27 de noviembre); y el 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió que Pérez había hecho suficientes méritos como para ser enjuiciado. Al día siguiente, el Congreso de la República autorizó el juicio y suspendió al Presidente de sus funciones.

En 1996 la estrategia gubernamental centró la construcción de viabilidad del nuevo PAME, bautizado por el gobierno de Caldera como *Agenda Venezuela*, en una acción orientada a comprometer a los principales actores políticos y sociales, por un lado, y con un claro sentido de la oportunidad en materia de compensación social, por el otro. Esta estrategia garantizó la viabilidad inmediata del PAME, y le permitió a Caldera culminar su mandato en un clima de aceptable gobernabilidad, cosa que, como acabamos de ver, no pudo lograr Pérez. Pero no garantizó la sostenibilidad de la política emprendida.

La continuidad de la adecuación del Estado venezolano a los designios del capital transnacional por parte del gobierno de Caldera, se adelantó a través de medidas que reiteraron el PAME de Pérez, como nuevos y significativos aumentos en el precio de la gasolina; desmontaje del control de cambio, para ir a la liberación completa del régimen

cambiario; aumento del Impuesto al Consumo Suntuario y las Ventas al Mayor (versión del impuesto a las ventas); liberación de las tasas de interés luego de su aumento en 20 puntos; nuevos préstamos provenientes de los organismos multilaterales por \$ 2,9 millardos en 1996 y \$ 2,6 millardos en 1997. Otras medidas profundizaron en la dirección marcada por el primer PAME: privatización de industrias del aluminio en la CVG; venta de las acciones de la CANTV, Aeropostal y de los bancos estatizados por la crisis financiera; liberación de los pocos alimentos y medicinas que seguían regulados; apertura de la participación del sector privado nacional y transnacional en la petroquímica, minería e industria vegetal; flexibilización del trabajo y reforma del régimen de prestaciones.

El anuncio y puesta en marcha de la *Agenda Venezuela* produjo un aumento significativo de la *protesta de austeridad*, que es la protesta contra las políticas de ajuste¹; ella fue protagonizada principalmente por el sector educativo y los trabajadores sindicalizados, además de planificada y controlada en su expresión masiva, que fue la fundamental. La protesta de austeridad de 1996 no reprodujo la experiencia también masiva, pero espontánea, desquiciada, violenta y trágica de 1989, ni rebasó el continente de la gobernabilidad. Aunque contra la *Agenda Venezuela* de 1996 se movilizaron tantas o más personas que contra el PAME de 1989, Caldera culminó su período presidencial y contó, en el impulso de esta política, con el apoyo de los principales actores políticos y sociales, los cuales le habían dado la espalda a similar política en el gobierno de Pérez. Entre ellos destacan los partidos del status, AD y COPEI; el partido de gobierno, Convergencia, fundado por Caldera para lanzarse a la presidencia como alternativa al bipartidismo y al FMI; partidos de izquierda parlamentaria, que formaban parte de la coalición gubernamental; la iglesia católica y la organización de los empresarios, Fedecámaras. Todos estos actores, furibundos opositores y críticos del *Gran Viraje* de Pérez le allanaron el camino a la *Agenda Venezuela* de Caldera. La estrategia de viabilización del PAME de 1996 fue, así, exitosa (Stephany, 2006).

Pero esta armonía, esta cooperación de los actores, y esta viabilidad del programa, no podemos interpretarlas como un acuerdo nacional. La *protesta de austeridad* librada con ocasión del anuncio y

¹ La *protesta de austeridades* definida por Walton y Seddon (1994:39) como «acciones colectivas de gran escala que incluyen manifestaciones políticas, huelgas generales y revueltas, las cuales son animadas por quejas sobre políticas estatales de liberalización económica y de reforma del mercado, implementadas en respuesta a la crisis de la deuda a instancias de las agencias internacionales». En un ejercicio de reconceptuación de dicha categoría, en (Stephany, 2001:22) abarco con ella todas las acciones de protesta provocadas por políticas de ajuste o neoliberales en general.

² Acuerdo de AD, Copei y URD en los albores de la democracia representativa venezolana, y que excluyó al PCV

puesta en marcha del PAME de 1996 reitera claramente el rechazo popular a las políticas de ajuste que ya se había registrado en 1989. En 1996 hubo una unidad entre actores y gobierno, pero divorciada de las bases populares. Ella le dio, ciertamente, viabilidad al PAME, pero no sostenibilidad a la política que dicho programa encarnaba. En 1998, ganó las elecciones el teniente coronel Hugo Chávez, famoso a partir de su rendición pública en el fallido golpe de Estado de febrero de 1992, y cuya campaña electoral había tenido como ejes: la promesa de reivindicación de los más débiles de la sociedad; la crítica despiadada a la clase política que había asumido la conducción del país a partir del llamado *Pacto de Puntofijo*²; y un encendido discurso en contra del neoliberalismo salvaje, del *paquete* de Pérez, y de la *Agenda Venezuela*.

El gobierno de Chávez le dio continuidad a la contra reforma neoliberal iniciada por Pérez en 1989, a través de políticas como el pago puntualísimo de los intereses de la deuda externa, la eliminación de la «doble tributación», el desmantelamiento de la seguridad social, el impuesto al consumo, la entrega de la plataforma deltana y las telecomunicaciones al capital transnacional. En este gobierno, se profundizó el proceso de desindustrialización del país, de quiebra de las industrias nacionales, de penetración del capital monopolista transnacional, y de dominación del capital financiero nacional y transnacional que cuenta en billones sus ganancias. Esto ha sido hecho a pesar del discurso «antiyanqui» del Presidente y a través de un poder militarizado y autoritario.

El ejercicio autoritario y arbitrario del poder, se expresa sobre todo en el control de los poderes públicos por parte del Presidente, con un fuerte desplazamiento de poder real de los poderes Legislativo y Judicial hacia el poder Ejecutivo y específicamente hacia la persona del Presidente. La autocracia³, unida a la grave crisis social y política, agudizó la conflictividad. El descontento se manifestó en numerosas protestas, nacionales y locales, algunas de las cuales fueron respondidas con mucha represión, ejercida tanto desde organismos oficiales como la Guardia Nacional, la DISIP y el DIM, como desde grupos paramilitares armados por el gobierno. El saldo de masacres, ajusticiamientos, muertos en protestas, desaparecidos, torturados, heridos y detenidos políticos habla por sí solo. Es, una vez más, la sangre de un pueblo derramada sin contemplaciones a través del monopolio de la violencia ejercido desde el Estado.

Como resultado de las tres últimas experiencias de gobierno, tenemos hoy en Venezuela una sociedad congestionada por todos los males que prometieron resolver las pretendidas reformas adelantadas en los últimos 16 años, calificadas de *Gran Viraje*, por Pérez, *Agenda Venezuela*, por Caldera y *Revolución Bonita* por Chávez: clientelismo, corrupción, autoritarismo, ineficiencia e incapacidad en el ejercicio de la administración pública, desindustrialización, desempleo, subempleo, monoproducción, rentismo y mayor dependencia en el ámbito económico; deterioro de los indicadores sociales, miseria, pobreza, violencia, enfermedades, exclusión de la educación, en lo social. Y en lo político, repetidas crisis de gobierno, violencia, antagonismos exacerbados y terrorismo de Estado.

La experiencia de estos últimos dieciséis años sugiere que la adecuación del Estado a la globalización ha producido sucesivas políticas cíclicas en Venezuela, y que para salir de ese círculo crítico se precisa mayor y mejor democracia. En estos tres lustros, la ciudadanía, en general, ha tenido que involucrarse activamente, en mayor o menor medida, en bandos políticos o no, en el espacio de lo público. No ha podido abstraerse de él. La participación de la población a través, tanto de la protesta en sus diversas formas, como de mecanismos electorales, ha venido reiterando dos cosas: la sociedad buena para la generalidad del pueblo venezolano, es democrática y es solidaria.

Podemos presumir entonces que ni el neoliberalismo ni el autoritarismo son aceptados por nuestro pueblo. Y que no va a ser tan fácil que el próximo gobierno logre regresarlo al ámbito privado. Sin embargo, cabe preguntarse si la visión de futuro que ha animado la actividad callejera en Venezuela en estos últimos lustros, es realista, viable y sustentable. O si, por el contrario, es un destino que procurando lo posible terminemos nuestros días desfigurados como los reformistas antediluvianos.

La pertinencia social del problema aquí planteado está en su contribución con el ocaso de los poderes establecidos y la proyección, en consecuencia, de una buena sociedad en Venezuela. Entiendo que es un problema que formulo a contracorriente de las premisas que hoy prevalecen en las Ciencias Sociales, las cuales desconfían del marxismo como herramienta teórica para conocer la realidad; del Estado como materia a investigar, y de los esquemas de renovación social.

³ Concentración de poderes en el Presidente

Sé, además, que este problema también contradice las principales argumentaciones que justifican los proyectos de país que se ventilan hoy en Venezuela a propósito de la crisis. Choca con el discurso de quienes, desde la capitulación ideológica y política, vienen legitimando al gobierno de Hugo Chávez como un proyecto de izquierda, olvidados de todos los principios de lucha ideológica, democratización de la toma de decisiones, soberanía frente al capital transnacional, defensa de los derechos humanos, reivindicación de las conquistas de los trabajadores y del pueblo en general, combate a la corrupción, armonía con la naturaleza, etc. Disputa igualmente con los proyectos de derecha que claman por más mercado y menos Estado, con libertades políticas o sin ellas. E interroga los proyectos que, no estando de acuerdo con los enfoques anteriores, dejan en las arenas movedizas de la generalidad, cuestiones fundamentales acerca del desarrollo nacional y su relación con la dominación transnacional.

Pero a pesar de todo, la ocasión es propicia, porque la crisis política y social plantea la discusión de la visión de país de venezolanos y venezolanas, no desde la conservación del orden social, sino desde su transformación. Aún los conservadores más recalcitrantes no podrían justificar tanta revuelta en función de la salvación nacional, para no salvar nada no transformando nada. Casi todos en este país coinciden, por otra parte, en la ampliación de la brecha social en el país, la pobreza crítica, el deterioro del ingreso familiar, de la salud y de la educación, el desempleo, la violencia y la inseguridad, como características principales de la crisis social; y jerarquizan la necesidad de resolver esa problemática. Y tirios y troyanos, aunque muy pocos sin rabo de paja, se rasgan las vestiduras por la democracia. El debate, en consecuencia, difícilmente podrá ser desviado del imperativo de transformación del orden social en Venezuela hacia uno de mayor democracia, justicia y equidad. Esta investigación se propone ser una contribución a esa búsqueda y a ese debate.

//

El drama venezolano de los últimos quince años parece indicar que sólo un gobierno de participación verdaderamente amplia, en el que los intereses y expectativas de todos los sectores tuvieran posibilidad de expresarse a través de actores representativos y con capacidad de negociación, y en un ambiente donde esa negociación fuera efectivamente posible, tendría la fortaleza y la capacidad de

sobrevivir como proyecto de largo aliento y de cambio progresista. ¿Será esto último posible? ¿Es realista proponernos hoy en Venezuela orientar la salida a la situación actual hacia un gobierno verdaderamente democrático que transite, además, el camino del impulso y la democratización de la producción? El alcance de esta interrogante como problema desde la teoría y en la práctica es, evidentemente, el nivel Estado. Sin embargo algunos autores señalan las limitaciones que el estudio de lo social presenta en la actualidad en ese nivel.

EL ESTADO

Ya en los años 70 del siglo pasado, Bobbio (1978) resaltaba lo compleja que se había vuelto la relación entre organización del Estado y democracia y en general la consideración de los problemas del Estado, cada vez más refractarios –según él- a ser caracterizados en fórmulas como «democracia directa», «autogobierno de los productores», etc.

Más recientemente Wallerstein (2003) habla del «estado centrismo» que caracterizó el estudio de la economía, la ciencia política y la sociología en el mundo occidental hasta 1945, así como los estudios del desarrollo, posteriormente. Señala el autor que dicho estado centrismo comenzó a ser cuestionado después de 1970, debido principalmente a que ya los Estados no pudieron seguir proyectándose como agentes de la modernización y el bienestar. De este modo, y con los cambios ocurridos en el mundo del conocimiento, habría mermado su calidad como unidad de análisis. En consonancia con lo anterior, el Estado, según Wallerstein, habría perdido el encanto que detentó como medio para la transformación social, en el impulso de una estrategia que, luego de tomarlo, violenta o electoralmente, permitiría a los revolucionarios sentar desde él, las bases de la nueva sociedad. Y aunque esta nueva cualidad del Estado en términos del análisis social no implica el abandono del estudio de sus mecanismos, sí abandona la suposición de que él sea la frontera más importante de la acción social.

La revisión del papel del Estado en términos del conocimiento y de la acción social, por parte de Holloway (2002), se va al extremo opuesto del entusiasmo del siglo pasado, para considerarlo el verdugo de las esperanzas de transformación social de los hijos de ese siglo, sentencia ésta que se habría cumplido por medio del fracaso histórico del concepto de revolución que la identifica con el control del Estado. Y puesto que el realismo del poder sólo ha podido y puede reproducir poder, el anti realismo del anti-poder sería la propuesta para cambiar el mundo. No se trata ya –según el autor- de que el Estado haya dejado de

ser escenario principal de la acción social transformadora, sino que no es escenario de ella en absoluto. Esta desproporción lleva la cuestión de la lucha contra el capitalismo a ningún lado. Porque si bien podemos concordar con el hecho práctico e histórico de que la sola lucha y conquista del poder del Estado no conduce a la anhelada transformación social, esto no quiere decir que tenga mucho sentido abandonarlo totalmente como espacio en disputa entre el capital y el trabajo, los militares y los civiles, los distintos estratos y grupos sociales de presión, la burocracia y la ciudadanía. Ni siquiera significa que su papel no sea preponderante. Lo que la historia parece haber dejado claro, es que no resulta suficiente.

Así las cosas ¿se justifica hoy un estudio del desarrollo, en el marco de una visión transformadora, en el nivel Estado? ¿Hay estudios del desarrollo que trasciendan este espacio? O, para plantearlo de otra manera, ¿podríamos abordar la problemática venezolana discutida arriba a un nivel distinto al del Estado?

Ciertamente, es imposible comprender lo que está ocurriendo hoy en Venezuela sin trascender, sobre todo en la consideración de los determinantes objetivos de la crisis, las fronteras de su Estado. Todo el análisis arriba expuesto es atravesado por las determinaciones de la globalización en Venezuela. Es para adecuar su Estado a esas determinaciones que se ha suscitado toda esta situación. Es la resistencia popular a esa adecuación lo que está en el origen de la inestabilidad política característica de los últimos tres lustros en Venezuela. Y es la imposición de esa adecuación la causa principal de la crisis social. Sin embargo, desde donde lo miremos, el Estado aparece como protagonista: él se adecúa, desde él se reprime, por su control se baten los votos y las balas.

Además del rechazo al estado centrismo, en el sentido común de nuestra época parece estar privando el rechazo a los grandes esquemas de renovación social. Ya no los objeta el pensamiento conservador solamente, sino que parte importante de la izquierda intelectual no oculta su desconfianza hacia ellos y prefiere dirigir su atención hacia objetos parciales, locales, fragmentados, y ajenos a cualquier perspectiva de carácter totalizador (Miliband, 1995). Esta postura, se sustenta en parte en el destino finalmente alcanzado por las experiencias tanto revolucionarias como reformistas que a lo largo del siglo XX intentaron en muchos países el tránsito al socialismo sin conseguirlo.

Interrogarse acerca de las posibilidades y los caminos actuales para la democratización en Venezuela de la política y de la producción, remite a la idea de un esquema de renovación social. A la luz de los razonamientos anteriores, tal empresa luce anacrónica o ingenua. Sin embargo, el problema que vengo planteando ha surgido como una demanda de la realidad. La imposición del modelo neoliberal en Venezuela se ha venido concretando en los últimos lustros a un costo social elevadísimo. Ella ha suscitado además una participación creciente de la ciudadanía en el ámbito público. A esta ciudadanía, la ha movilizado una visión de futuro, una visión – es nuestra hipótesis- de buen estado democrático y de buena sociedad solidaria. El tránsito a esa sociedad no es un reto personal, ni académico. Se trata más bien de una posibilidad que habría que procurar, cosa que no podríamos hacer obviando al Estado, y más tratándose de uno tan protagónico como el venezolano.

Por otra parte, cuando hablo de democratización de la vida económica y política en Venezuela, estoy proponiendo la discusión acerca de la distribución actual de poderes, y la necesidad de redistribuirlos para ampliarlos, para socializarlos, en los distintos ámbitos de la sociedad: económico, social, político, moral, de justicia, etc. Proponerse esta democratización, plantea la cuestión acerca de si las personas en el ejercicio de esos poderes pueden ser controladas por la sociedad. En Venezuela, tengo la impresión de que la alternabilidad democrática lo que ha producido es una intermitencia de despotismos más o menos acentuados, dependiendo de la capacidad de los gobernantes que se han turnado en el ejercicio del poder, para evadir el control sobre sus actuaciones.

Al respecto, Miliband (1995) plantea que en sociedades en las cuales las grandes desigualdades de todo tipo son parte intrínseca de la vida diaria, es inevitable que el poder asuma formas concentradas y oligárquicas, independientemente de su retórica democrática o de cuán sofisticados puedan ser los procedimientos formales que enmascaran tales actos. Por el contrario, en sociedades que tienden a la igualdad y cuyos ciudadanos son profundamente conscientes de sus derechos democráticos, un liderazgo no necesitaría convertirse en poder oligárquico.

Podemos suponer, a partir de estas consideraciones, que cualquier proyecto de democratización de la sociedad venezolana impondría acortar la enorme brecha de la desigualdad existente en la actualidad. O, para decirlo de otra manera, que las tendencias actuales

al autoritarismo son cónsonas con la gran brecha social existente y que ésta a su vez es indispensable y funcional al sostenimiento de tal poder autoritario.

La creciente centralización de poder en Venezuela, manifestada en el control por parte del Ejecutivo de los distintos poderes, la militarización de los más importantes cargos públicos, la utilización del presupuesto para la reversión del proceso de descentralización, el culto a la personalidad y la tendencia a la criminalización de la disidencia, entre otras expresiones, se viene realizando, sin embargo, en nombre de la disolución de esa brecha y de un principio de democracia participativa que se contrapone en el discurso a la vieja y gastada democracia representativa venezolana.

Tanta concentración de poder ha sido posible en buena medida gracias a la gran capacidad de maniobra que el ingreso petrolero le da al gobierno, lo que plantea la discusión, nada fácil, acerca de la relación entre estatización y democratización. La promesa constante de reivindicación de los pobres, por otra parte, crea nuevas necesidades, expectativas y aspiraciones que el poder no logra satisfacer.

En realidad, en Venezuela, la democratización de la vida pública no pasa de ser un discurso de actores políticos relevantes. Detrás del discurso oficial actual de democracia participativa hay un proceso de reconcentración burocrática del poder. Detrás de la demanda de democracia de algunas voces de la oposición, se agazapa similar aspiración, como lo demuestra la *Carmonada* del 11 de abril de 2002. La polarización política encubre, oscurece, disimula, la aguda crisis social, política y moral.

Las constantes crisis de gobierno en Venezuela, producidas por el rechazo de segmentos importantes de la población a políticas que consideran impuestas por los gobiernos, y que no comparten, inducen a pensar que un gobierno democrático es deseable no sólo desde el punto de vista moral o desde una postura ideológica, sino que resulta indispensable para el desarrollo de un proyecto de cambio en el país, de largo aliento. El petróleo y la fortaleza que éste le otorga al Estado y por ende a los gobiernos de turno, favorecen, sin embargo, la imposición por parte de éstos de visiones unilaterales de país, y su menosprecio a la visión de otros actores y sectores de la sociedad, y parecen haberle

creado a nuestros gobernantes la peligrosa idea de que no necesitan buscar el consenso⁴. Como vimos arriba, le pasó a Pérez en 1989 cuando se lanzó a la aventura de un programa de ajuste prácticamente solo. Le pasó a Caldera en 1996, quien se conformó con el consenso de los actores, a pesar de su debilitamiento como intermediarios legítimos del conjunto de la población. Y le ocurrió tanto al gobierno de Chávez, que concentró poderes y sustituyó la discusión por la propaganda; como a los actores políticos de la oposición, concentrados en hacerse del poder del Estado, o de algunas de sus cuotas, sin haber tendido los puentes para la formulación de un acuerdo verdaderamente nacional.

Finalizando la década de los 70 del siglo XX, Bobbio (1978) se quejaba: «no tenemos libros, ni óptimos ni pésimos, sobre los sistemas políticos de los Estados que se autodefinen como socialistas, y mucho menos sobre el Estado alternativo del futuro, puesto que no se está satisfecho de los existentes.» Esta situación no parece haber cambiado mucho.

Con el proceso de mundialización o globalización que se desata en esa misma década, el Estado se convierte en su principal agente. Al respecto, señala Amin que en el capitalismo lo económico se emancipa de la sumisión a lo político y se transforma en la instancia directamente dominante que comanda la reproducción y la evolución de la sociedad. De esta forma, la lógica de la mundialización capitalista es, ante todo, la del despliegue de esta dimensión económica a escala mundial y la sumisión de las instancias políticas e ideológicas a sus exigencias. En este proceso, los mercados se integran a escala mundial solamente en dos dimensiones: los mercados de productos y de capital tienden a ser mundializados. Pero los mercados de trabajo permanecen segmentados. En este contraste se expresa, según el autor, la articulación actual de una economía cada vez más mundializada, y la permanencia de las sociedades políticas diferenciadas.

Al respecto Ellen Meiksins Wood (2000) agrega que si bien el Estado podría estar perdiendo algunas funciones, está ganando otras «como conducto principal entre el capital y el mercado global». O sea, en el mercado global, el capital necesita al Estado para operaciones de rescate como en México y los Tigres Asiáticos; para garantizar la disciplina laboral y contener los conflictos generados por los ajustes; para acrecentar la movilidad de capital, y como instrumento de la competencia entre economías nacionales. Porque «detrás de cada

⁴ En *¿Qué es la democracia?*, Giovanni Sartori (2003) define que un gobierno que «nace de las opiniones de los electores (del voto que expresa la opinión) y que gobierna en sintonía con estados prevalecientes de opinión pública es, precisamente, un gobierno fundado sobre el consenso» (90)

corporación transnacional hay una base nacional que depende de su Estado local para sustentar su viabilidad, y de otros estados para darle acceso a otros mercados y otras fuerzas de trabajo» (Idem).

En fin, la adecuación del Estado a la mundialización ha supuesto, por un lado, su retirada en materia de funciones paliativas, y por el otro, su avanzada en el impulso de la reestructuración de la economía. Esto ha suscitado la oposición masiva y callejera de la gente a través de distintas formas de protesta, con un impacto indudable en el sistema político. Que en estas condiciones, el Estado pueda seguir cumpliendo su tarea, depende, según Meiksins Wood, de la reducción de los derechos democráticos.

Como lo define Miliband (1970), una teoría del Estado es también una teoría de la sociedad y de la distribución del poder en esa sociedad. En Venezuela la reducción de los derechos democráticos se ha producido durante el último gobierno, a través de la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo nacional y más específicamente en la persona del Presidente de la República. Melinkoff (1990:26) señala que hay crisis políticas que dan lugar a un Estado de excepción caracterizado por la desaparición de una o más de las instancias de poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial). Si bien en nuestro país no ha desaparecido ninguna de estas instancias -más bien fueron creados el Poder Moral y el Poder Electoral- todas ellas se supeditaron cada vez más al Ejecutivo y específicamente a su Jefe. Más adelante, Melinkoff rechaza que se identifique Gobierno y Estado porque hacerlo «impediría el análisis del desplazamiento de los poderes reales de un órgano de poder del Estado a otro en una determinada coyuntura política» (ob.cit, 27) En Venezuela, se produjo tal desplazamiento hacia el Ejecutivo. La verificación de tal fenómeno ¿podría autorizarnos a calificar al Estado venezolano como un Estado de excepción? Este tipo de situaciones, según Melinkoff, se suele interpretar como una muestra de intervención de lo político en lo económico. Y agrega: «Las autocracias son un importante ejemplo del predominio del Poder ejecutivo» (Ob. cit, 28). La tendencia actual en Venezuela, entonces, es hacia una menor democracia, hacia la instauración de una autocracia, lo que, volviendo a Meiksins Wood, podría posibilitar la adecuación de su Estado a la mundialización.

Ahora bien, ¿cómo abordar el problema de la democratización del Estado en Venezuela? La idea que venimos rondando, es la de estudiar los caminos y las formas de una democratización profunda en la vida política y en la vida productiva en Venezuela, de cara a las

que suponemos aspiraciones de su pueblo, en general. Si esta investigación logra sustentar tal suposición, tendría que contemplar entonces, como asuntos nodales, la redistribución del poder económico y la propiedad, no tanto en términos de riqueza como de capacidad de producir riqueza; así como también el problema de la explotación en un gobierno ejercido por «muchos» o ampliamente democrático. Y, sobre todo, tendría que contemplarlo desde y hacia la realidad concreta de la política venezolana.

Ahora bien, si el agente de la crisis política y social venezolana es, como consideráramos arriba, transnacional, ¿por qué enfocar el estudio hacia ella y no hacia sus agentes? Creo, en primer lugar, que esos agentes están siendo estudiados desde el enfoque marxista por muchas más personas que la realidad venezolana, que para la casi totalidad de esos mismos estudiosos, parece ser un misterio. Sé, por otra parte, que el estudio de la crisis y sus agentes es una misma cosa, sólo que, en lugar de largas caracterizaciones acerca del meollo de la globalización, se trataría su articulación reciente, presente y futura con la política venezolana. Finalmente, si bien los agentes del neoliberalismo en Venezuela lo son igualmente de la crisis, no lo serán de su transformación democrática. Son los agentes, actuales y posibles del tránsito hacia la Venezuela democrática y solidaria, los que capturan mi atención.

///

Dentro de lo que se ha llamado proceso de globalización en el mundo, el capitalismo viene acelerando una tendencia a la «capitalización» de la vida social y natural que consiste en el establecimiento del valor de cambio como medida de significación y control de las relaciones sociales. El proceso de capitalización de la naturaleza supone el tratamiento de toda la vida terrestre, incluida por supuesto la humana, como si se tratara de mercancías controladas y subordinadas a las finalidades del capital. Todos los elementos de la naturaleza considerados como capital, de acuerdo con la lógica del sistema, han de servir a la finalidad de la reproducción extendida o ampliada del capital (O'Connor, Martin, 1994). Pero desde los campos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, han surgido importantes argumentaciones que concluyen en la no sustentabilidad de tal sistema de producción.

En primer lugar, el capital no hace y no puede controlar la reproducción de la misma manera en que pretende regular la

producción industrial de mercancías. La vida no se produce como se producen los enlatados. La apropiación por parte del capitalismo de la fuerza de trabajo, del espacio y de la naturaleza exterior es autodestructiva; ejemplo de ello es la crisis ecológica (O'Connors, James, 1991).

Por otra parte, el planeta le impone límites biofísicos al proceso de acumulación. Las implicaciones de la irreversibilidad termodinámica y el hecho de que la tierra es un sistema materialmente cerrado, hacen poco probable que sea capaz de sostener las tendencias actuales de crecimiento económico.

Al respecto Wernwe Stahel (1995) señala que el proceso económico es, desde el punto de vista físico, una transformación de energía y de recursos materiales ordenados (baja entropía) disponible al inicio del proceso, en energía y estructuras materiales dispersas (alta entropía) resultante al final del proceso. La sustentabilidad material del proceso económico reposa en ese límite cualitativo. Pero el crecimiento económico y tecnológico no está sujeto a un control político (cualitativo) de la sociedad, sino a la libre expansión del mercado con primacía de lo cuantitativo. El uso de fuentes renovables de energía en el sistema actual de producción reduciría la velocidad de degradación entrópica, pero no aseguraría la sustentabilidad debido – dice Saher – a la entropía generada por el propio proceso de reciclaje y al elevado consumo de los productos. En el capitalismo, el tiempo histórico se acelera demasiado en relación con la capacidad de evolución y adaptación de la biósfera. El ser humano produce nuevos materiales y estructuras a una velocidad tal que no hay organismos capaces de descomponer y reciclar tales productos. No parece posible, entonces, conciliar estos tiempos de la producción capitalista con las necesidades de sustentabilidad, cuyo horizonte temporal es otro.

Para el marxismo, esta crisis de sustentabilidad viene a ser una crisis en las condiciones de producción, entendidas éstas como «todo lo que puede tratarse como si fuera una mercancía, aunque no haya sido producida como mercancía de acuerdo con la ley del valor, o con la ley de los mercados. Esta definición amplia nos permite analizar a la fuerza de trabajo, a la tierra, a la naturaleza y al espacio urbano bajo la misma categoría general.» (O'Connor, James, 1991:119). Según Marx, el progreso de la agricultura capitalista y del arte de acrecentar su fertilidad constituía un progreso también en el arte de despojar el suelo, de arruinar sus fuentes durables de fertilidad y por supuesto de explotar al trabajador. Un mayor desarrollo capitalista de la gran industria suponía

para él una producción más rápida de este proceso de destrucción. El socialismo, como superación del modo capitalista de producción, partiría de una producción de valor de uso (no de valor de cambio) de bienes necesarios para la satisfacción de necesidades humanas legítimas o justificables, a diferencia de lo que ocurre con las necesidades creadas en la sociedad de consumo. El objetivo del progreso técnico, para Marx, no es entonces el aumento indefinido de bienes, sino la reducción de la jornada de trabajo y el aumento del tiempo libre. La superación de las relaciones sociales de producción capitalista, pasaría así a un primer plano en la búsqueda de soluciones a la crisis actual.

La sustentabilidad ecológica, por otra parte, es solamente un aspecto a considerar. Un programa debe poder sostenerse en el tiempo en términos materiales y económicos, sociales, y culturales, además de físicos y ambientales. En los moldes institucionales de una economía capitalista de mercado, esto no parece ser posible. Porque la búsqueda de equilibrios sustentables supone la subordinación de los medios económicos a dicho propósito. Y el capitalismo, por el contrario, lo somete todo al fin económico del lucro. Lo que ocurre en Venezuela, entonces, no tiene nada de sorprendente. Proponernos satisfacer las expectativas populares de cambio implica, como hemos visto, someter, a través del Estado, el imperativo económico del capital mundial, a la búsqueda de equilibrios sociales, culturales, físicos y ambientales. El cambio se plantearía fuera del capitalismo.

Algunos autores consideran, sin embargo, que la presunción de que la destrucción ecológica es resultado del modo de producción capitalista, es una limitación del análisis marxista para abordar el tema ecológico porque supone una solución espontánea con el establecimiento de la alternativa socialista (Demirovic, 1994, O'Connor, 1994). Para ellos, tiene poco sentido proponer un modelo de revolución que presuma la solución de los problemas ecológicos, a partir de la abolición de las relaciones de producción capitalistas y su reemplazo por relaciones socialistas de producción. En consecuencia, y a partir de la convicción de que el tiempo apremia por la distancia cada vez mayor entre el tiempo político y el natural, postulan la conveniencia de estrategias dirigidas a resolver específicamente los problemas ecológicos en sí mismos, a partir de transformaciones democráticas de los procesos de discusión pública y toma colectiva de decisiones.

Según Demirovic, para integrar los parámetros ecológicos dentro de una teoría de la democracia, hay que avanzar hacia una coordinación democrática de los distintos modos de relación de la sociedad con la

naturaleza. Y solamente las formas de socialización abiertas a la negociación podrían coordinar entre esos diferentes modos. Negado al establecimiento de una voluntad general como alternativa, el autor prefiere hablar de un «consenso de la cultura» a ser alcanzado por medio de una nueva lógica de articulación, en virtud de la ruptura del compromiso de clases fordista-keynesiano y la emergencia de nuevas formas de vida y nuevos actores sociales. Esta rearticulación representaría un incremento de la racionalidad y la complejidad en la medida en que la forma de la división social del trabajo pueda someterse al control de los actores sociales, por ejemplo, para reducir sistemáticamente la acumulación y la concentración de la competencia de toma de decisiones. Y los problemas se afrontarían donde surgieran, involucrando rápida y flexiblemente los efectos en el proceso de toma de decisión y reconstituyendo flexiblemente las relaciones socialmente construidas con la naturaleza. Todo esto supone una sociedad cada vez más democrática y con capacidad real de negociación de los distintos intereses que coexisten en ella. Y no sólo en su relación con la naturaleza sino en todos los ámbitos de la vida humana

Parece ser, sin embargo, que para la realización del proyecto neoliberal, las libertades democráticas son un problema. Al respecto *Democracia contra capitalismo* de Ellen Meiksins Wood, resulta un material revelador en la discusión de la tesis de que, si bien el capital aún puede ejercer una forma puramente económica de explotación, ello se le dificulta cada vez más. Si esto es así, en el marco de la lógica de producción dominante, no sería posible la reinstitucionalización de las sociedades, y específicamente de la sociedad venezolana, para un ejercicio democrático que permita la permanente negociación de los diversos intereses a través de actores representativos.

En Venezuela, como hemos visto, la democratización de la vida pública es una demanda de la sociedad. En la perspectiva de negociación democrática de los intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad, es preciso detenerse en los programas de los actores políticos con respecto a la democracia y a las tareas cumplidas y en cumplimiento por el Estado venezolano en su articulación con la globalización. ¿Están dispuestos a reivindicar las prestaciones sociales que le fueron arrebatadas a la clase trabajadora por el gobierno de Caldera y que el gobierno de Chávez olvidó, si se constata que es esto

lo que las mayorías quieren efectivamente? ¿Querrán eliminar el impuesto al consumo (IVA) que le quita hoy a cada pobre un alto porcentaje del precio de casi cada mendrugo que se lleva a la boca? ¿Pensarán en el impulso de la industria y el agro nacionales? ¿Le establecerían condiciones al capital extranjero para controlar sus movimientos? ¿Querrá alguien en Venezuela realmente hoy «tomar» el poder del Estado para bloquear la globalización? Las aspiraciones de cambio del pueblo venezolano ¿tienen verdaderamente representación política? La heterogeneidad de la oposición, ¿incluye vanguardias «antisistémicas»?

Ahora bien ¿cómo sostener una política de cambio como la que venimos discutiendo? La historia nos muestra en unas cuantas experiencias cómo el Estado perdió su carácter de agente de transformación del capitalismo en socialismo y cómo la conservación de ese poder al precio que fuera pasó a convertirse en el objetivo final del esfuerzo político de la dirigencia. ¿Podrían tales vanguardias, en el caso de penetrar el poder, conjurar la suerte de los reformismos en el poder del siglo pasado? Y en el caso de asaltar ese poder ¿lograrían eludir la suerte de las revoluciones?

BIBLIOGRAFÍA

Amin, Samir, *Capitalismo, imperialismo, mundialización*, en Seoane, José y Emilio Taddei (Compiladores) *Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: Clacso) Págs. 15-29.

Boron, Atilio, *Teoría y Filosofía Política, la tradición clásica y las nuevas fronteras*. Introducción. Ponencia presentada a las Primeras Jornadas Nacionales de Teoría y Filosofía Política, organizadas por EURAL y la Carrera de Ciencia Política bajo el auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Bobbio, Norberto 1978 «Existe una doctrina marxista del Estado?, en *¿Qué socialismo? Discusión de una alternativa* (Barcelona: Plaza & Janes) Págs. 51-79.

Carta de Intención FMI-Venezuela, 1989

López M., 1999, «La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993», en *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Margarita López Maya (ed), Caracas, Nueva Sociedad, 209 – 235

Meiksins Wood, Ellen 2000a (1995) *Democracia contra capitalismo* (México D.F.: Siglo XXI Editores) 2000b «Trabajo, clase y estado en el capitalismo global», en *OSAL* (Buenos Aires) N°1 . Junio. Págs. 111-118.

Miliband, Ralph 1995"«A plausibilidade do socialismo», en Sader, Emir *O mundo depois da queda* São Paulo: Paz e Terra). Págs.123-139. 1970, *El Estado en la Sociedad Capitalista, México, Siglo XXI*

O'Connor, Martin (1994) «Codependency and Indeterminacy: A Critique of the Theory of Production»

O'Connor, James, 1991 «La segunda contradicción del capitalismo. Sus causas y consecuencias», en *El Cielo por Asalto*, Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, Año I, N°2, Otoño, pp119-135.

SARTORI, Giovanni1987 (2003) *¿Qué es la democracia?*, Buenos Aires trad. Miguel González y María C.Pestellini, edit.Taurus.

Stephany, 2006, *Políticas de ajuste y protesta popular en Venezuela*, Caracas, ediciones Faces, y Vicerrectorado Académico, UCV, 250 pp

Tarrow, 1983, *Struggling to Reform: Social Movement and Policy Change during Cycles of protest* (Western Societies Program: Occasional Paper No. 15) Center for International Studies, Cornell University.

Wallerstein, Immanuel 2003 «¿Qué significa hoy ser un movimiento anti-sistémico?», en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, Enero. Págs.179-184.

Walton, Jhon y David Seddon, 1994, *Free Markets & Food Riots. The Politics of Global Adjustment* Blackwell EE III